



# Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

Distr. general  
20 de marzo de 2014  
Español  
Original: francés

---

## Comité contra la Tortura

### 48º período de sesiones

#### Acta resumida de la 1081ª sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el miércoles 23 de mayo de 2012, a las 15.00 horas

*Presidente:* Sr. Grossman

## Sumario

Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad  
con el artículo 19 de la Convención (*continuación*)

*Segundo informe periódico de Cuba (continuación)*

---

La presente acta podrá ser objeto de correcciones.

Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo. Deberán presentarse en forma de memorando, incorporarse en un ejemplar del acta y enviarse, *dentro del plazo de una semana a partir de la fecha del presente documento*, a la Dependencia de Edición, oficina E.4108, Palacio de las Naciones, Ginebra.

Las correcciones que se introduzcan en las actas de las sesiones públicas del Comité se reunirán en un documento único que se publicará poco después del período de sesiones.

GE.12-42909 (S) 190314 200314



\* 1 2 4 2 9 0 9 \*

Se ruega reciclar



*Se declara abierta la sesión a las 15.00 horas.*

**Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 19 de la Convención (continuación)**

*Segundo informe periódico de Cuba (CAT/C/CUB/2; CAT/C/CUB/Q/2 y Add.1; HRI/CORE/1/Add.84) (continuación)*

1. *Por invitación del Presidente, la delegación de Cuba toma asiento a la Mesa del Comité.*
2. **El Sr. Silvera Martínez** (Cuba) afirma que, como se indica en el informe (párrs. 52 y 53), el Código Penal establece más de diez figuras delictivas constitutivas de tortura pero no define expresamente el delito de tortura conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la Convención. Se valora incluirlo en una futura reforma legal.
3. La noción de "peligrosidad social" debe entenderse según lo dispuesto en el artículo 72 y ss. del Código Penal, en los que se define como "estado peligroso" la conducta que viola las normas de convivencia social y amenaza el orden público. Para la declaración de ese estado, se cumplen las reglas del debido proceso. A las personas declaradas en estado peligroso no se les imponen sanciones penales, sino medidas reeducativas, terapéuticas o de vigilancia que tienen como finalidad lograr su reeducación. En ningún caso se aplica por motivos distintos a los establecidos en el Código Penal y mucho menos por las ideas políticas de las personas.
4. En relación con la pena de muerte y los juicios sumarísimos descritos en el informe (párr. 260), el Sr. Silvera Martínez confirma que la pena capital sigue vigente en Cuba, pero destaca que únicamente con carácter excepcional para los casos de graves violaciones de los derechos fundamentales de las personas o de ataque a la seguridad nacional. En vista de los numerosos agresiones externas contra Cuba y del número considerable de víctimas de estos atentados, no se puede derogar aún la pena capital, si bien hay esperanza de que llegue en el futuro el día en que existan las condiciones para abolirla. En cualquier caso, desde el año 2003 no se ejecuta la sanción de muerte ni existe en la actualidad ninguna persona condenada a esta pena. A las personas ejecutadas en 2003 se les aplicó el procedimiento sumarísimo regulado en los artículos 479 y 480 del Código Procesal Penal, que se distingue del procedimiento ordinario únicamente por una disminución de los términos. El juicio se realizó en público y los acusados contaron con la asistencia legal de reconocidos abogados defensores.
5. El Sr. Silvera Martínez señala que la separación de poderes no es aceptada unánimemente y subraya que no está en el mandato del Comité el control de las formas en que se organizan los Estados partes, elemento esencial de la soberanía nacional. La Constitución establece que el Tribunal Supremo Popular es la máxima autoridad judicial y se subordina jerárquicamente a la Asamblea Nacional del Poder Popular, órgano supremo del Estado. El Consejo de Estado no tiene ninguna función ejecutiva. En todo caso, la subordinación jerárquica no implica injerencia del ejecutivo en las funciones judiciales. Para más información sobre la organización del sistema judicial cubano y los principios fundamentales que garantizan su independencia, se invita al Comité a analizar los párrafos 127 y ss. del informe.
6. Para que los instrumentos internacionales ratificados por Cuba se integren en el ordenamiento jurídico nacional, hay que seguir un procedimiento de incorporación mediante norma jurídica. A tales efectos, el Decreto-ley N° 191/99 establece un procedimiento que permite el estudio de los instrumentos internacionales a los que Cuba prevé adherirse, y se realizan las acciones encaminadas a garantizar su recepción, de tal forma que no exista contradicción entre el derecho interno y esos instrumentos. En

consecuencia, los jueces aplican el orden nacional, que está en plena consonancia con los instrumentos internacionales ratificados por Cuba.

7. **El Sr. Álvarez Valle** (Cuba) afirma que la información sobre supuestos arrestos o detenciones cortas o temporales de miembros de partidos políticos carece de todo fundamento e invita al Comité a examinar los párrafos 70 a 76 del informe y las respuestas escritas a la lista de cuestiones para tener más información sobre las disposiciones legislativas y las reglas aplicables en esta materia. Quien tiene autoridad para detener es la policía, si bien la ley dispone que, en determinadas circunstancias, cualquier persona puede detener al infractor en el momento de ir a cometer la infracción y al delincuente *in flagranti*. En tal caso, se entregará al sospechoso inmediatamente a la policía.

8. En Cuba no existe policía judicial y los órganos de inteligencia no detienen. La policía no puede mantener detenida a una persona más de 24 horas. Tras ese período, el instructor penal podrá solicitar que se mantenga la detención durante las próximas 72 horas, lo cual es excepcional, y solo el fiscal tiene facultad para retener a la persona durante 72 horas adicionales. Los detenidos son registrados cuando ingresan en el centro de detención. Tienen contacto con sus familiares y sí existe *habeas corpus*. En Cuba no hay centros de detención administrativa ni centros de detención secreta.

9. En el marco de su formación, se forma a los agentes de la policía en el respeto a la integridad física y moral de todas las personas y en las regulaciones jurídicas internacionales en vigor. Los exámenes forenses, incluidas las autopsias, son realizados por personal médico especializado del Ministerio de Salud Pública y los pueden solicitar la Fiscalía, los tribunales, el Ministerio del Interior o los abogados defensores. No se realizan nunca en instalaciones policiales. En el caso de las investigaciones forenses, el abogado de la persona detenida puede solicitar que se la someta a un examen médico específico que, como todo servicio médico, será gratuito.

10. La atención y el seguimiento a las personas enajenadas mentalmente que cometen delitos constituyen elementos de vital importancia dentro de la actividad forense. En 2008, el Ministerio de Salud Pública aprobó una resolución que incluye la peritación mental al acusado, testigos y víctimas, siempre que existan indicios en este orden, lo que contribuye a la eficacia e imparcialidad de las investigaciones.

11. **El Sr. Pino Bécquer** (Cuba) indica que, en relación con las 263 denuncias por malos tratos en locales de detención presentadas entre 2007 y 2011, resultaron penalmente responsables 46 agentes de las fuerzas del orden, sancionados con penas de entre 1 y 8 años de privación de libertad. En todos los casos contaron con asistencia jurídica y tuvieron derecho a impugnar la sentencia en un tribunal superior. Las víctimas fueron resarcidas en la forma y cuantía establecida en la sentencia del tribunal.

12. La policía no puede tener detenida a una persona por más de 24 horas sin dar cuenta al juez instructor o al fiscal. Desde el momento en que estos decretan medidas cautelares, el abogado del acusado puede proponer pruebas a favor de su cliente y solicitar la revocación o modificación de las medidas. El término de la instrucción no debe exceder de 60 días y solo puede prorrogarse justificadamente hasta un término de 6 meses a petición motivada del juez instructor. Solo en casos excepcionales, casi siempre relacionados con la especial complejidad de la investigación, el Fiscal General de la República puede conceder un nuevo término.

13. Corresponde a los tribunales militares el conocimiento de los procesos penales en que resulte acusado un militar, aun cuando la víctima sea civil. Asimismo, pueden conocer de los procesos por hechos cometidos en zonas militares, con independencia de la condición civil o militar que tengan los participantes. Los tribunales militares tienen la facultad de declinar la jurisdicción a los tribunales ordinarios, lo cual realizan en la práctica con frecuencia.

14. Como se indica en la sección del informe sobre la aplicación del artículo 14 de la Convención (párrs. 236 a 246), toda persona que sufre daño o perjuicio causado por agentes del Estado tiene derecho a reclamar la correspondiente reparación ante los tribunales penales y civiles.

15. Las causas de los fallecimientos de las personas detenidas son diversas (por ejemplo, suicidios, infartos y riñas entre internos). Ninguna muerte se ha producido como resultado de actos o negligencias de agentes de las fuerzas del orden. En todos los casos se realizaron las investigaciones correspondientes a cargo de comisiones constituidas por médicos forenses y otros especialistas. De todas las investigaciones se ha dejado constancia documental. En el año 2010 fallecieron 44 personas en prisiones y 69 en hospitales. En el año 2011, estas cifras se situaron en 29 y 60 personas, respectivamente.

16. En Cuba no se ha presentado ninguna denuncia por torturas o malos tratos como procedimiento para forzar al acusado a declarar. De conformidad con la Constitución, es nula toda declaración obtenida bajo coacción, y los responsables incurren en las sanciones que fija la ley.

17. **La Sra. Bonachea Rodríguez** (Cuba) indica que, en virtud del artículo 127 de la Constitución y del artículo 28 de la Ley N° 83 de la Fiscalía General, esta institución puede realizar inspecciones en cualquier centro de detención. Así, una entidad independiente de la administración penitenciaria lleva a cabo un control. Las visitas se realizan sin previo aviso y de forma sistemática, de acuerdo a una planificación establecida mensualmente. En ellas, el fiscal tiene la facultad de entrevistar a todos los detenidos. Elabora, acto seguido, un acta con observaciones y recomendaciones que transmite a las autoridades competentes. En los casos en que detecta infracciones, emite una resolución de obligado cumplimiento por parte del personal penitenciario, quien debe informar al fiscal sobre las medidas adoptadas para solventar las deficiencias constatadas. Las organizaciones de la sociedad civil también pueden visitar las prisiones y entrevistarse con las personas detenidas. Ningún funcionario puede alegar obediencia debida para cumplir una orden de tortura o malos tratos. De ocurrir algún caso, puede ser denunciado al mando superior correspondiente o a la Fiscalía.

18. En la actualidad se ejecuta un plan de inversiones para la modernización de la infraestructura penitenciaria que abarca hasta el año 2017. El enfoque progresivo en el tratamiento penitenciario permite rebajar las sanciones hasta dos meses cada año por buena conducta y aplicar regímenes cada vez menos severos hasta alcanzar la libertad condicional; el objetivo es estimular la conducta positiva de los internos y favorecer las soluciones sustitutivas de la detención. Gracias a este sistema, más de dos tercios de los reclusos han podido salir en libertad sin cumplir totalmente su sanción. Las condiciones de los centros de detención se ajustan a las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos en lo que a higiene, alimentación y acceso al agua potable se refiere. Las celdas disciplinarias se utilizan de manera excepcional en aquellos casos de infracciones graves de la disciplina. Las personas privadas de libertad tienen acceso a asistencia médica y estomatológica de forma gratuita, y equipos médicos integrados por varios especialistas visitan con sistematicidad los centros penitenciarios. Se garantiza el contacto del recluso con el mundo exterior; mantienen la comunicación con familiares y amigos, reciben visitas y tienen permisos de salida al hogar por tiempo determinado. No pueden imponerse medidas disciplinarias que afecten los derechos antes mencionados.

19. En Cuba no existe hacinamiento en las cárceles. El total de la población penal es de 57.337 personas; de este total, hay 31.494 en régimen cerrado. El propósito de la política penitenciaria es avanzar hacia el régimen abierto. Para ambas categorías de personas en prisión, los detenidos pueden incorporarse al trabajo socialmente útil, recibir instrucción escolar, participar en un programa de capacitación en oficio o beneficiarse de programas sociales, de desarrollo al deporte y la cultura. Hoy 27.095 internos siguen estudios desde nivel primario hasta universitario; 24.531 se capacitan en algún oficio y 10.251 están

incorporados al programa "Educa a tu hijo". A todos los privados de libertad se les garantiza la asistencia religiosa. La incorporación al trabajo es un derecho de todos los sancionados; en la actualidad, 23.113 internos trabajan. A todos se les remunera con arreglo a la legislación laboral aplicable y todos gozan de derechos a efectos de la jubilación y la seguridad social.

20. **El Sr. Fernández de Cossío** (Cuba) dice que el Sr. Alan Gross, a cuyo caso se refirió el Comité, es un ciudadano estadounidense que fue arrestado y condenado a prisión tras un proceso judicial por atentar contra la seguridad del Estado y el orden constitucional cubano. Se encuentra en buenas condiciones físicas, disfruta de acceso regular a las autoridades consulares de su país y de diversas personalidades. Mantiene igualmente comunicación con su esposa, que lo ha visitado, y su familia. El Gobierno de Cuba ha propuesto al de los Estados Unidos de América dialogar para buscar una solución al caso y está a la espera de una respuesta.

21. Todas las personas que se trasladan a residir fuera de Cuba lo hacen por voluntad propia. En el caso del grupo excarcelado en el año 2010, ninguno fue forzado a trasladarse a España. Doce de los excarcelados decidieron por voluntad propia no abandonar Cuba y disfrutaban del beneficio de excarcelación anticipada. Todo ciudadano cubano tiene derecho a los servicios consulares del Estado fuera del territorio nacional, en correspondencia con la legislación del país de residencia y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. No existe exilio interior o exterior en Cuba. Toda persona puede circular libremente por todo el territorio y no hay desplazados internos en el país. Las normas y regulaciones migratorias están bajo examen. La devolución a Haití de los migrantes haitianos que llegan a Cuba por accidente en su intento de emigrar hacia los Estados Unidos de América se rige por un acuerdo tripartito entre los Gobiernos de Cuba y Haití y la Organización Internacional para las Migraciones. Cada repatriación respeta la voluntad de los migrantes y recibe el apoyo de la Cruz Roja.

22. No hay ejemplos de personas que hayan torturado en otro país y se encuentren en Cuba. A quien solicita asilo y no es reconocido como refugiado se le devuelve al país de donde procede al llegar a Cuba, no a su país de origen. En este tema, Cuba trabaja estrechamente y se coordina con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Por mandato del artículo 6 del Código Penal, en ningún caso se pueden extraditar ciudadanos cubanos. De incurrir en conductas afines con lo estipulado en la Convención, son juzgados por los tribunales cubanos. En lo que respecta a las muertes ocurridas en el Hospital Psiquiátrico de La Habana, se trata de un incidente totalmente excepcional y los responsables han recibido severas sanciones, tal y como se indicó en las respuestas escritas que Cuba presentó al Comité.

23. **El Sr. Quintanilla Román** (Cuba) dice que la ratificación de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas es un proceso largo porque Cuba desea asegurar la compatibilidad de las obligaciones internacionales derivadas de estos instrumentos con el ordenamiento político y jurídico interno. En relación con la eventual ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, reafirma que en Cuba no existen prácticas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y recuerda que las peticiones individuales son tramitadas por los tribunales nacionales.

24. El Ministerio de Relaciones Exteriores coordinó la labor del grupo nacional establecido para la elaboración del informe presentado al Comité. En el proceso participaron organizaciones no gubernamentales (ONG), el Parlamento, centros de estudio, institutos de investigación y otras instituciones representativas de la sociedad civil cubana a través de contribuciones escritas y mediante consultas periódicas sobre las diferentes versiones del informe. Varias de estas organizaciones poseen el estatus consultivo ante el

Consejo Económico y Social. El Gobierno tiene la voluntad de realizar un proceso de consultas y participación similar de cara a la implementación de las recomendaciones que formule el Comité.

25. **El Sr. Reyes Rodríguez** (Cuba) afirma que únicamente existe una zona en la que se limite la libertad de circulación en Cuba y se trata de la bahía de Guantánamo, ocupada por los Estados Unidos de América y que acoge actualmente un centro de tortura internacional cuyas actividades violan la Convención. Cuba no participa en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, por tanto, no tiene relación alguna con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, referida aquí como "fuente principal" de información del Comité. Por eso, el Gobierno de Cuba rechaza cualquier evaluación que se sustente en alegaciones o juicios de valor de la Comisión.

26. Cuba no ha reconocido la competencia del Comité para examinar las comunicaciones de personas que afirman ser víctimas de violaciones de las disposiciones de la Convención. Sin embargo, la delegación puede confirmar que todas las denuncias trasladadas al Comité sobre supuestas torturas o penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes enumeradas en la lista de cuestiones son falsas e infundadas. Lo mismo se aplica a los casos mencionados en el transcurso del presente período de sesiones.

27. A modo de ejemplo de la voluntad de las autoridades cubanas de cooperar con los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos y con el Relator Especial sobre la cuestión de la tortura, Cuba entregará al Comité una carpeta con la información que ha suministrado en respuesta a algunas alegaciones de violaciones de los derechos humanos. En todos los casos, son falsas las denuncias de acosos, amenazas, palizas, denegación de asistencia médica, represalias contra familiares o privación de libertad. Lo que se califican como "actos de repudio" son manifestaciones pacíficas de ciudadanos en ejercicio de sus libertades fundamentales. Las autoridades solo intervienen en estos casos para asegurar la protección de la integridad física y la dignidad de todos los ciudadanos. No se ha privado de libertad a persona alguna por el ejercicio de cualquier derecho humano. Los defensores de derechos humanos tienen las más amplias oportunidades y garantías para el ejercicio de sus actividades. Ahora bien, no se puede calificar como defensor de derechos humanos a una persona o grupo que, bajo las instrucciones de una Potencia extranjera, desarrolle actos dirigidos a la destrucción del orden constitucional.

28. Cuba es uno de los países que aceptó más recomendaciones en el marco del examen periódico universal (más de dos tercios). Desmiente la alegación de que en los últimos tiempos se ha incrementado el número de encarcelaciones. En cuanto a las instituciones nacionales de derechos humanos, Cuba considera que las instituciones establecidas en virtud de los Principios de París ni son el único modelo posible ni tienen necesariamente mejores resultados en materia de promoción y protección de los derechos humanos y, por tanto, no es necesaria la modificación de su actual sistema nacional. En lo que respecta a la libertad de asociación, cabe señalar que la legislación cubana define los criterios de creación y funcionamiento de las ONG. En Cuba existen más de 2.200 organizaciones de este tipo en los más diversos sectores de actividad.

29. **El Sr. Mariño Menéndez** (Relator para Cuba) asegura a la delegación de Cuba que es práctica del Comité, compuesto por expertos independientes que intervienen como tales y no en calidad de representantes de un Estado, hacer preguntas sobre casos concretos a los Estados partes que presentan su informe. No se trata, pues, de una práctica excepcional reservada a Cuba.

30. El Relator quisiera tener más información sobre la noción de "peligrosidad social" y sobre la naturaleza de los actos que abarca; pregunta si ya se han dictado condenas por esta razón y en qué consisten las llamadas medidas reeducativas, terapéuticas o de vigilancia impuestas a los autores de estos actos. En efecto, la independencia judicial no es

exactamente competencia del Comité, pero ello no obsta para que, en el marco de su mandato, que consiste en asegurar que los Estados partes establezcan las garantías necesarias para prohibir la tortura, el Comité vele por la total independencia de los miembros del aparato judicial respecto del poder ejecutivo. Así, es preciso saber si el sistema judicial cubano adolece de disfunciones, si los jueces son inamovibles y si hay casos, como en numerosos países del mundo, en que se corrompen, sufren presiones políticas o incluso cometen actos delictivos.

31. Si bien el Estado parte ha rechazado en bloque la información facilitada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por ONG igualmente fidedignas, sería interesante que se aclarara la práctica de las autoridades cubanas en materia de detención preventiva. En particular, la delegación podría confirmar que no se recurre a la detención preventiva de corta duración (de 24 a 48 horas) e indicar si existe un registro de este tipo de detenciones.

32. Habida cuenta de que el Código Penal no castiga los malos tratos, el Relator desearía saber qué naturaleza tenían los actos descritos en las 263 denuncias de personas detenidas presentadas al Fiscal General entre 2007 y 2011 y qué delitos se imputaron a los autores de estos actos. En particular, la delegación podría señalar de qué infracciones se declaró culpables a los 46 agentes del Estado condenados a una pena de privación de libertad en estos casos.

33. El Relator observa que la duración de la instrucción no debe superar los 60 días y solo puede prorrogarse 6 meses más por petición motivada del juez instructor; a este respecto, solicita más información sobre el papel del Fiscal General en la investigación preliminar. Desearía saber, en particular, si se pueden recurrir las decisiones del Fiscal y, de ser así, si la delegación puede citar casos en los que se ha interpuesto un recurso. Asimismo, la delegación podría precisar si el juez instructor se somete a las instrucciones del Fiscal o si es totalmente independiente.

34. El Relator hace referencia al párrafo 69 del informe y a la nota a pie de página correspondiente, y afirma no entender por qué el procedimiento de *habeas corpus* no procede en el caso de que la privación de libertad obedezca a sentencia o auto de prisión provisional dictado en expediente o causa por delito. Se agradecería una explicación al respecto. Por otro lado, la delegación cubana podría indicar si se han comunicado las conclusiones de la investigación sobre la muerte de varias personas detenidas a sus familias y qué seguimiento se ha dado a su versión de los hechos, que parece contradecir estas conclusiones.

35. El Sr. Mariño Menéndez lamenta no haber recibido respuesta a la pregunta que formuló en la sesión anterior y se interesa de nuevo por el paradero de José Daniel Ferrer y otros disidentes detenidos en abril de 2012 por "atentar contra el orden público", que al parecer han sido puestos en libertad recientemente. Por la información de que dispone, el Sr. Ferrer sigue en territorio cubano y sobre él siguen pesando los cargos imputados. Se invita a la delegación a indicar si esta información es exacta y a aclarar lo sucedido a los otros disidentes afectados. Resultaría igualmente útil disponer de más datos sobre los llamados "actos de repudio" que denuncian algunas fuentes. En lo que respecta a la legislación sobre emigración, la delegación podría explicar por qué la obtención de un visado de salida del territorio es un proceso tan largo y dificultoso en Cuba y en qué consiste, a grandes rasgos, la reforma en curso en esa materia.

36. El Relator observa que el Estado parte afirma tomarse muy en serio la ratificación de instrumentos internacionales y necesitar tiempo para ello, pero pregunta cuánto tiempo necesitará el Estado parte para ratificar la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, que data de 1951.

37. **La Sra. Sveaass** (Correlatora para Cuba) insiste en el hecho de que el Comité, comprometido con los principios de transparencia, independencia y diálogo, suele formular

preguntas concretas y en que no debe verse esta práctica como una forma de acusar al Estado parte, sino simplemente de velar por que se respeten las disposiciones de la Convención. Desearía tener más información sobre la función del Fiscal General, y más concretamente desearía saber si puede realizar visitas a los centros de detención sin previo aviso, entrevistarse con las personas detenidas o solicitar que un médico examine a quienes presenten heridas para determinar las causas. También desearía saber qué seguimiento se ha dado a las denuncias trasladadas al Fiscal y quién vela por que se apliquen las observaciones y recomendaciones que transmite a la autoridad competente. En este sentido, señala que esa tarea formaría parte perfectamente de las atribuciones de una comisión nacional de derechos humanos o de un defensor del pueblo, instituciones de las que carece lamentablemente el Estado parte.

38. La Correlatora quisiera disponer de información más precisa sobre las indemnizaciones que recibieron las víctimas de los 46 agentes del Estado condenados por la vía penal. En lo que respecta a la muerte de 26 personas internadas en un centro psiquiátrico de La Habana en enero de 2010, precisa que la pregunta que formuló en la sesión anterior no versaba sobre las penas impuestas a los responsables de las infracciones, sino sobre las medidas y demás garantías jurídicas que haya implantado el Estado parte para evitar que se vuelva a repetir un suceso de ese tipo, así como sobre las indemnizaciones concedidas a los supervivientes y a las familias de los fallecidos.

39. La Sra. Sveaass deduce de las estadísticas facilitadas por la delegación que cerca de 2.200 mujeres se encuentran en prisión en estos momentos en el Estado parte y pregunta si se las separa sistemáticamente de los hombres también detenidos, si se han presentado denuncias por sufrir actos de violencia y cuál es la proporción de mujeres entre el personal penitenciario. La Relatora quisiera saber asimismo el número exacto de personas detenidas por un período corto de tiempo durante la visita del Papa a Cuba. Desearía saber igualmente cuántos procedimientos por acoso se han incoado, cuántas condenas se han impuesto por esta razón y en qué consiste exactamente el régimen de máxima seguridad aplicado a algunos detenidos.

40. Por último, habida cuenta de que Cuba rebate sistemáticamente la información que facilitan los organismos internacionales y otras ONG, la delegación cubana podría indicar si el Estado parte prevé cooperar en el futuro con los organismos internacionales independientes en aras de la transparencia.

41. **El Sr. Bruni** pregunta cuántas personas han sido detenidas y se encuentran actualmente recluidas en aplicación del artículo 243 del Código Procesal Penal, relativo a los ataques a la seguridad del Estado, qué penas se les ha impuesto y si se las ha recluido en régimen de aislamiento o incluso en un régimen de prisión especial. En este sentido, quisiera saber si el Estado parte ha elaborado una lista con los centros de detención oficiales, lo que disiparía toda duda sobre la posibilidad de que se recluya a personas en lugares de detención secretos.

42. **El Sr. Gaye** muestra su sorpresa por la información recogida en el párrafo 119 del informe, que apunta que la legislación penal cubana posibilita la detención de toda persona que haya cometido cualquier acto constitutivo de tortura, según se define en la Convención, mientras que la tortura no es en sí misma un delito. Por eso, desearía conocer el motivo por el que se detiene a los autores de actos de esta naturaleza y el contenido de las "medidas para el aseguramiento" mencionadas en dicho párrafo. Agradecería disponer de más información sobre la función exacta de la Caja de Resarcimientos de las víctimas mencionada en el párrafo 288 del informe.

43. **La Sra. Gaer** lamenta profundamente no haber recibido precisión alguna sobre los casos particulares que mencionó en la sesión anterior, en particular en torno a la forma como se desarrollaron las visitas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) al



Estado parte y si esta organización pudo entrevistarse con los detenidos. Precisa que, con carácter general, al Comité le preocupa que un Estado parte declare que en su territorio no se comete ninguna infracción prevista por la Convención: ello sugiere que el régimen en cuestión considera la cantidad de delitos de este tipo una cifra despreciable o que incluso los tolera. Por eso, el Comité desea tener más datos e invita a la delegación a formular sus comentarios sobre la información de que dispone. En un informe de marzo de 2012, Amnistía Internacional acusa al Estado parte de realizar una campaña de acoso e intimidación a los disidentes políticos, a quienes detiene arbitrariamente y enjuicia por la vía penal a fin de disuadirlos de actuar en favor del respeto de los derechos civiles y políticos. Se agradecerá todo comentario al respecto, así como sobre el futuro que depara a las integrantes del grupo Damas de Blanco.

44. **El Presidente** afirma que la definición que da el Código Penal de los comportamientos constitutivos de "peligrosidad social" es muy amplia y solicita si se prevé revisar esta disposición para evitar todo riesgo de aplicación abusiva. Asimismo, parece que las personas detenidas por este motivo son objeto de un procedimiento sumario difícilmente compatible con las debidas garantías procesales. Resultaría útil saber qué tiene que decir la delegación al respecto.

45. La delegación ha indicado que la causa que concluyó con la condena a muerte y ejecución de tres hombres en 2003 fue pública. Sin embargo, según algunas fuentes, ni la prensa ni los allegados de las personas en cuestión pudieron asistir a las audiencias. Asimismo, la sentencia no menciona ninguno de los argumentos esgrimidos por los abogados de la defensa, lo que lleva a preguntarse si se respetaron las debidas garantías procesales, en particular si los abogados dispusieron de un plazo suficiente para preparar la defensa. Toda precisión en esta cuestión que pueda aportar la delegación será de utilidad. La delegación podría igualmente indicar si una persona que debe comparecer ante un tribunal militar puede impugnar la competencia del tribunal y si el Estado parte mantiene la invitación que cursó en 2009 al Relator Especial sobre la cuestión de la tortura.

46. **El Sr. Silvera Martínez** (Cuba) manifiesta que la Constitución establece explícitamente como principio que los jueces se deben exclusivamente a la ley. La Ley orgánica de 1997 del poder judicial establece la inamovilidad de los jueces y define las condiciones de su nombramiento y de su revocación, así como las sanciones disciplinarias que se les puede imponer en caso de que incumplan sus obligaciones. Asimismo, hay un Código deontológico cuyo aprendizaje forma parte integral de la formación de los jueces, que establece como principio fundamental la obligación de impartir justicia con absoluta imparcialidad.

47. La causa que concluyó con la condena a muerte y ejecución de tres personas fue pública y los familiares de los condenados pudieron asistir a las audiencias. El acceso del público solo se puede restringir en circunstancias concretas, previstas explícitamente por la ley, por ejemplo cuando la naturaleza de los hechos juzgados puede atentar contra la moral pública. A las personas juzgadas por un tribunal militar les amparan las mismas garantías que en un procedimiento penal ordinario y además pueden plantear toda cuestión que estimen necesaria para hacer valer sus derechos.

48. **El Sr. Pino Bécquer** (Cuba) afirma que la falta de definición de la tortura en el Código Penal no es un factor de impunidad en la medida en que el abanico de infracciones penales previstas abarca los actos enunciados por la Convención. Prueba de ello son las condenas de 46 agentes del Estado entre 2007 y 2011 a penas de privación de libertad de entre 1 y 8 años a raíz de denuncias por malos tratos. Cuando un agente del Estado comete una falta que no es constitutiva de infracción penal, se imponen las correspondientes sanciones administrativas.

49. La función del fiscal está definida en el artículo 109 del Código Procesal Penal, que dispone en particular que el fiscal vela por la legalidad de las diligencias practicadas en el marco de la fase de instrucción. El fiscal puede decretar la detención preventiva de un sospechoso durante un plazo máximo de 72 horas. Sin embargo, cabe apuntar que se trata de una medida excepcional, ya que por regla general se priman medidas no privativas de libertad como el arresto domiciliario, y que, en los pocos casos en que se decreta, la detención preventiva rara vez alcanza las 72 horas. En todo el procedimiento, la persona detenida recibe la asistencia de un abogado de su elección o, en su defecto, de un abogado de oficio que pueden impugnar en todo momento la medida de detención. Cabe señalar que en Cuba únicamente el 12% de los detenidos son personas en espera de juicio, frente a proporciones de entre el 30% y el 60% en otros países. La ley prevé explícitamente el procedimiento de *habeas corpus*. Sin embargo, solo se justifica en caso de detención ilegal.

50. El fiscal también tiene el cometido de velar por que las condiciones de detención cumplan con lo dispuesto en la ley y respeten los derechos de las personas detenidas. A tal fin, visita los lugares de detención, se entrevista con los detenidos y examina los registros de detención. En todo caso, sus facultades en este ámbito son más amplias que las de un defensor del pueblo porque las medidas correctivas que recomienda cuando detecta violaciones son de aplicación obligatoria para las autoridades en cuestión.

51. La Caja de Resarcimientos es el mecanismo por el que el Estado indemniza a las víctimas de un perjuicio cuando el autor del perjuicio no está en condiciones de abonar la indemnización o se demora en el pago.

52. **La Sra. Bonachea Rodríguez** (Cuba) dice que las mujeres condenadas a una pena privativa de libertad son reclusas en centros reservados a mujeres cuyo personal está formado exclusivamente por mujeres. El régimen progresivo aplicado en los centros penitenciarios, que permite suavizar las modalidades de ejecución de la pena en función de la actitud y del grado de enmienda del recluso, contribuye al éxito de la reinserción social de los antiguos presos. El régimen de máxima seguridad tan solo se aplica a las personas cuya condena a muerte haya sido conmutada o a las personas condenadas a prisión perpetua. Se han implantado eficaces mecanismos de control de la ejecución de las penas.

53. **El Sr. Pino Bécquer** (Cuba) manifiesta, en referencia a las personas mencionadas por el Comité que fallecieron mientras estaban detenidas, que se practicó la autopsia a todas ellas para determinar la causa de la muerte y que se remitió a las familias el informe correspondiente. Algunas personas descalificaron posteriormente las conclusiones del informe, pero la delegación tiene pruebas que demuestran que habían aprobado las conclusiones del forense.

54. La infraestructura hospitalaria, en particular en el ámbito de la atención psiquiátrica, está bien desarrollada. Gracias a la recuperación económica iniciada en 2009, se han ejecutado recientemente importantes inversiones en este sector a fin de modernizar los centros médicos existentes y construir otros nuevos. El país está muy orgulloso del alto nivel de cualificación de los profesionales de la salud, y se adoptan medidas constantemente para mejorar la atención dispensada.

55. **El Sr. Álvarez Valle** (Cuba) dice que la ley autoriza a la policía a mantener detenida a una persona durante 24 horas. Estas detenciones son debidamente registradas y se respetan todas las garantías jurídicas fundamentales de los detenidos.

56. **El Sr. Reyes Rodríguez** (Cuba) afirma que las opiniones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación en Cuba no son más que eso, su opinión, y que Cuba se niega a intercambiar información alguna con esta institución. En 2009 se hicieron gestiones para que el Relator Especial sobre la cuestión de la tortura, por aquel entonces el Sr. Manfred Nowak, realizara una visita a Cuba, pero de poco sirvieron por la imposibilidad de encontrar fechas que convinieran a todas las partes. El

actual Relator Especial, Sr. Juan Méndez, ha expresado al Gobierno de Cuba su deseo de visitar el país; en estos momentos se estudia la cuestión. La información según la cual se ha acosado y agredido a las integrantes de las Damas de Blanco es totalmente falsa. Que Cuba no se haya adherido a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 no le impide utilizar este instrumento como referencia en el marco de su colaboración con el Alto Comisionado para los Refugiados. Las autoridades cubanas no interfieren en el trabajo del Alto Comisionado y respetan sus decisiones en materia de determinación del estatuto de refugiado.

57. En lo que respecta a la posibilidad de que los cubanos se desplacen al extranjero, el Sr. Reyes Rodríguez indica que los cubanos viajan por lo general con relativa facilidad a América Latina. En cambio, tienen muchas dificultades para viajar a países industrializados, en particular a Europa, fundamentalmente por el coste de los visados necesarios. Los Estados Unidos de América alientan la inmigración ilegal procedente de Cuba por la ley que confiere trato preferente a los inmigrantes cubanos (la llamada Ley de ajuste cubano), en virtud de la cual a todo ciudadano cubano que llega a territorio estadounidense, incluso de manera ilegal, se le reconoce el estatuto de refugiado, con independencia de sus antecedentes penales, incluso si ha cometido las más terribles atrocidades.

58. Es perfectamente legítimo que el Comité formule preguntas; su función es preguntar a los Estados partes sobre toda cuestión que le pueda plantear problemas a la luz de la Convención. Lo que la delegación pone en cuestión es la fiabilidad de la información que maneja. Así, el informe de Amnistía Internacional citado por la Sra. Gaer no representa una fuente fidedigna, puesto que no se elaboró con información de primera mano recabada sobre el terreno, sino con información falsa difundida por personas manipuladas por el Gobierno de los Estados Unidos de América.

59. **El Sr. Fernández de Cossío** (Cuba) afirma que, en vista de que no existen lugares de detención secretos, no hay necesidad de elaborar una lista con los lugares de detención oficiales, que además podría no ser exhaustiva. Según los instrumentos internacionales que le confieren su mandato, el CICR debe poder proteger y asistir a las víctimas de los conflictos armados u otras situaciones de violencia. Ahora bien, Cuba ni está en guerra ni vive un conflicto interno. Por eso, el Gobierno no tiene obligación alguna de autorizar al CICR en los centros penitenciarios del país. Sin embargo, ya ha apelado al CICR en ocasiones anteriores y lo volverá hacer si lo estima necesario.

60. **El Presidente** agradece a la delegación cubana las respuestas facilitadas. El Comité las tendrá debidamente en cuenta en sus observaciones finales, junto con toda otra información de que disponga en relación con el examen del segundo informe periódico de Cuba.

*Se levanta la sesión a las 18.00 horas.*